

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinario don Álvaro Mesa Latorre, con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dicta sentencia definitiva en la cual, en el aspecto penal, condena a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio calificado, cometido en las personas de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez y, de apremios ilegítimos cometidos en contra de Pedro Ríos Castillo, a sufrir la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo y, la de tres años de presidio menor en su grado medio, respectivamente. En ambos casos, además de las penas corporales, aplica las accesorias legales del caso y decreta su cumplimiento efectivo al no concederle penas sustitutivas.

En el mismo fallo, en el plano civil, el referido Ministro instructor, con costas, accede a las demandas formuladas en contra del Fisco de Chile, condenándolo al pago de ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000) a cada uno de los hermanos de la víctima Guido Troncoso Pérez y, el mismo monto, a cada una de las hijas de Pedro Ríos Castillo, sumas reajustables conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Impugnada esa decisión, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a modificar el fallo en algunos aspectos. En primer lugar, confirmó la decisión penal que condenó a Oscar Alfonso Podlech Michaud, declarando que queda condenado por el delito de homicidio calificado cometido en la persona de



Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, a la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Por otro lado, rebajó la pena que se le impuso como autor del delito de aplicación de tormentos, a sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo.

La misma sentencia, confirma el fallo en la condena civil, con declaración que se rebaja, sin costas, el monto de la indemnización a favor de cada uno de los hermanos de Guido Troncoso Pérez, a la suma de cincuenta millones de pesos y, a la de setenta millones de pesos respecto de cada una de las hijas de Pedro Ríos Castillo.

Finalmente, contra esta última sentencia, la defensa del condenado dedujo el recurso de casación que pasa a examinarse, respecto del que se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que la defensa del encartado Podlech Michaud, dedujo recurso de casación en el fondo asilado en el artículo 546, causales N° 7 y N° 2 del Código de Procedimiento Penal.

Respecto de la primera causal, denuncia la errónea aplicación de los artículos 451 a 488 del Código de Procedimiento Penal; artículos 1698, 1712 y 1713 todos del Código Civil; artículo 15 N° 1, 14 N° 1, 391 N° 1 y 150 N° 1, todos del Código Penal y, artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Señala que en el fallo se tuvo por acreditada la participación de su representado, mediante prueba insuficiente, la que no tiene la entidad necesaria para constituir presunciones judiciales a las que se les pueda otorgar valor probatorio, pues estas no son múltiples y graves, precisas ni directas, ya que ellas pueden conducir a conclusiones diversas.



Añade que se condena al encartado, únicamente por estimar que se desempeñaba como fiscal judicial ad- hoc, en circunstancias de que ostentaba el cargo de fiscal militar, actuando sólo como asesor, alegando que ha existido una infracción a las leyes reguladoras de la prueba por cuanto, a la función determinada que le entregó el Ejército, se le dio una connotación errada y distinta, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues de haberse interpretado correctamente la misión designada a Podlech Michaud, se hubiese dictado sentencia absolutoria a su respecto.

En lo que dice relación con la causal del numeral 2, sostiene que, en el caso que se considere que existe participación criminal en grado de autoría del sentenciado, ello lo sería conforme al artículo 391 del Código Penal, ya que no existen antecedentes probatorios suficientes para calificar dicho homicidio como delito de lesa humanidad, ello por cuanto, el artículo séptimo del Estatuto de Roma, exige que, para calificar un delito como de lesa humanidad, se requiere que se acredite que se haya cometido un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y, que dicha línea de conducta implique una acción conforme a una política de Estado que conlleve una organización de dicho ataque o actos para promover dicha política de asesinato o exterminio, vinculado a factores ajenos a la comisión de un delito común, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos, lo que no acontece en la especie, por cuanto los órganos del Estado de esa época, jamás pretendieron perseguir a personas que carecieran de importancia para los fines de la dictadura, sea por su origen político, religioso o de ideas contrarias al régimen militar de la época. En efecto, refiere que no existe prueba de que el imputado se hubiere concertado y llevado adelante



este asesinato con la sola finalidad de controlar la supuesta acción delictual de las víctimas.

Agrega que, la sentencia condenatoria argumenta que el hecho ocurre con antelación a la fecha en que se promulga la Ley 20.357, por lo que no le sería aplicable, lo cual constituye un error al tenor de lo prescrito en el artículo 18 del Código Penal y artículo 19 N° 3, inciso quinto de la Constitución Política de la República, lo que implica que el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Ley 20.537, si favorecen a su representado y que, para efectos de calificar su conducta como un delito de lesa humanidad, resulta necesaria la concurrencia de los requisitos del artículo séptimo de dicho Estatuto, lo que no acontece en la especie, por lo que, estando frente a la comisión de un delito común, le son aplicables las reglas de prescripción de la acción penal del artículo 93 y 94 del Código Penal, encontrándose prescrita la acción penal.

Termina solicitando que se declare la nulidad del fallo, y dicte sentencia de reemplazo, en la que se absuelva a Oscar Podlech Michaud o, en su caso, decrete que la acción penal de autos se encuentra prescrita dada la naturaleza del delito objeto de este juicio.

SEGUNDO: Que, de la lectura del arbitrio en análisis, surge que en éste se solicita –como petición principal- que se anule el fallo recurrido y se dicte una sentencia de reemplazo de carácter absolutorio, por no haberse acreditado la participación del condenado en el delito y, de manera subsidiaria, se pide se declare prescrita la acción penal a su respecto, lo que da cuenta que se apunta a objetivos diversos e incompatibles.

TERCERO: Que, de lo anteriormente expuesto es factible apreciar que el recurso es impreciso en su construcción, ya que alega por una parte una ausencia de responsabilidad penal, y de otra una responsabilidad existente,



pero prescrita, lo que desde ya atenta contra el éxito de un recurso de derecho estricto.

En tal sentido, las alegaciones de no haberse acreditado suficientemente su participación, además de la solicitud expresa de absolución son incompatibles con la petición de declarar prescrita la acción penal, que supone, precisamente, una responsabilidad criminal existente y establecida en el juicio.

En conclusión, lo que los comparecientes empiezan por desconocer, termina siendo aceptado, de lo que se colige que el arbitrio de nulidad sustancial en estudio contiene motivos que son incompatibles entre sí, basados en supuestos distintos, contradictorios e inconciliables, los que se anulan recíprocamente y que, consecuentemente, son ajenos al recurso de derecho estricto que es el de casación en el fondo, lo que conduce a su rechazo.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se declara que, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo formalizado por el encausado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la causa Rol 803-2022.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Matus A.

Rol N° 69.149-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C., y Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr.



Valderrama y el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

